DIARIO

DE LAS

SESIONES DE CORTES.

PRESIDENCIA DEL SEÑOR GIRALDO.

SESION DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 1820.

Se leyó y aprobó el Acta del dia anterior.

Se mandaron pasar á la comision de Libertad de imprenta dos exposiciones de la Junta Suprema de Censura: la primera acompañando para la resolucion de las Córtes otra exposicion que les dirigia la Junta provincial de Censura de Avila, con la manifestacion de los motivos que la habian obligado á no dar la segunda calificacion al folleto titulado *Perico y Pendanga*, publicado en aquella ciudad por el canónigo de su catedral D. Juan Chacon; y la segunda remitiendo igualmente una representacion documentada de la Junta provincial de Murcia, en que dando cuenta de los incidentes ocurridos en aquella capital con motivo de la denuncia de un impreso, hecha á nombre de la Sociedad patriótica de dicha ciudad, proponia dos dudas, las cuales elevaba la Junta Suprema al Congreso con arreglo al decreto reglamentario de 10 de Junio de 1813, capítulo III, artículo 32.

El Secretario del Despacho de la Gobernacion de la Península, trasladando un oficio del de Estado, remitido desde Sacedon, participaba á las Córtes que SS. MM. continuaban con perfecta salud; y que el Rey, habiendo concluido el 10 los 15 baños, descansaba el 11 para restituirse hoy á la córte con su augusta esposa. Oyéronlo las Córtes con especial satisfaccion.

Don Juan Antonio de Iriarte y D. Victoriano de Encina y Piedra, el primero cónsul y el segundo apode-

rado del Consulado de Cádiz, exponian, entre otras cosas, que los permisos concedidos á particulares para hacer especulaciones mercantiles en los buques extranjeros sin más derechos que los que adeudan los nacionales y un 4 por 100 de habilitacion de bandera, eran perjudiciales por la defraudacion que se hacia al comercio, á la administracion pública y á la Nacion. Para evitar estos y otros males que expresaban, y con el objeto de que se fomente el comercio, la marina mercante y militar, y de que el valor de los fletes quede en la Nacion, y sea respetado y protegido nuestro pabellon, proponian el medio de que se impusiese un derecho de convoy sobre buque y carga; que este derecho fuese inferior al 4 por 100 de habilitacion con que ahora se gozaban los permisos, y que se permitiese, mientras la necesidad lo exigiese, la compra de buques en el extranjero. Esta exposicion se mandó pasar á la comision ordinaria de Hacienda.

A la de Instruccion pública pasó otra de D. Manuel Martínez de Bernardo, maestro titular de escribir en Zamora, en la que ofrecia á las Córtes algunas breves reflexiones para perfeccionar esta enseñanza, reducidas á dotar bien á los maestros, disminuir su número, y adoptar restricciones para el exámen y aprobacion de los que pretendieren enseñar.

A la comision especial encargada de proponer los premios á que se ha hecho acreedor el ejército de San Fernando, se mandó pasar una exposicion de D. Juan Nepomuceno Fernandez, abogado del colegio de Málaga, el cual exponia á las Córtes haber sido uno de los

seis sugetos que nombró el pueblo de Madrid en 9 de Marzo para que le representase, en cuya virtud crearon el ayuntamiento constitucional y autoridades que representaron al Rey el bien que resultaría de que jurase la Constitución, logrando por este medio sofocar la guerra civil; por cuyos servicios pedía que el Congreso se sirviese demarcar tal hecho, declarando lo que tuviese á bien en favor de los expresados seis individuos.

Pasó á la comision de Agricultura una Memoria del teniente coronel retirado D. Francisco Laviano, en la cual por indicaciones generales analizaba el manejo observado en la renta del tabaco: se hacia cargo tambien de que este sistema habia dado márgen al contrabando: expresaba los perjuicios que habia ocasionado la limitacion de surtirse del extranjero por contratas de crecidas cantidades, en las cuales se habian perdido considerables sumas, y encarecia las utilidades de que era susceptible este ramo bajo el método que proponia, reducido sustancialmente á la abolicion de estancos y absoluta libertad de sembrar el tabaco en la Península, y á la imposicion de un censo pecuniario sobre las tierras en que se sembrase. Para la realizacion y buen efecto del plan, creia indispensable que el Congreso activase la desvinculacion de todo terreno; que se hiciese el repartimiento de tierras ofrecido, y que se vendiesen otras, dividiéndolas por suertes y clases.

A la comision de Comercio y ordinaria de Hacienda reunidas se mandó pasar una exposicion en que la Diputacion provincial de Sevilla se quejaba de que los privilegios concedidos á la compañía del Guadalquivir eran perjudiciales á la Nacion, ya porque no habian tenido otro objeto que el de servir á los sócios para sus especulaciones, y ya porque eran opuestos al sistema constitucional; y concluia pidiendo su abolicion.

Don Miguel de Iramategui, deseoso de que se verificase el restablecimiento de la colegiata de San Isidro, que ha solicitado el ayuntamiento constitucional de Madrid, presentó un proyecto para que se realizase sin el gravámen de más de 20.000 pesos anuales á que ascienden los sueldos de los canónigos. Se mandó que esta exposicion se reuniese al expediente señalado para la discusion. (*Véase la sesion de ayer.*)

Cuando se pasó á la comision de Legislacion la representacion del ayuntamiento constitucional de Madrid, fué sin antecedente alguno, por lo que pidió los que hubiese en el asunto. Despues pasaron á la misma comision y á la de Hacienda todos los expedientes y papeles remitidos por el Gobierno sobre restablecimiento de jesuitas, y entre ellos se hallan los relativos á la iglesia de San Isidro: con ellos dieron su dictámen las comisiones reunidas, que se leyó en el Congreso el día de ayer, y se señaló la discusion para el 14.

En el mismo dia de ayer se remitieron por el señor Secretario de Gracia y Justicia los papeles siguientes correspondientes á este asunto, que se mandaron agregar al expediente para el dia señalado para la discusion:

Copia de una consulta hecha á S. M. por el Consejo pleno de Castilla en 31 de Enero de 1817, en que conformándose con el dictámen de su fiscal segundo D. José de Hevia, se opuso con energia y respeto á la entrega de la iglesia de San Isidro, habiendo únicamente en favor de esta providencia los consejeros D. José Antonio de Larrumbide, Conde del Pinar, y D. José Montema-

yor, que hicieron voto particular, y en 23 de Febrero del mismo año de 1817 se sirvió S. M. resolver lo siguiente: «No me conformo, y he mandado lo conveniente á la Junta que tengo autorizada para entender privativamente, con exclusion de todo otro tribunal, en el restablecimiento de la Compañía de Jesús, y prevenida de consultarme las dudas.»

Una consulta original de la Junta de restablecimiento, con fecha 28 de Enero del mismo año de 1817, manifestando las providencias dadas para la entrega de la iglesia de San Isidro, y los embarazos que se oponian á que se llevase á efecto; siendo de notar que el Conde del Pinar, D. José Antonio de Larrumbide y el fiscal D. Francisco Gutierrez de la Huerta eran individuos de esta Junta, y al mismo tiempo asistian en el Consejo de Castilla cuando se trataba de estos asuntos, y entendian en ellos como consejeros y fiscal. Esta consulta de la Junta no tiene resolucion.

Dos representaciones del cabildo de San Isidro, una con fecha 9 de Diciembre, y otra con fecha de 15 del mismo de 1816, reclamando respetuosamente las providencias de su separacion de la iglesia; y al márgen de la primera de ellas hay un decreto de mano de S. M. que dice: «Informe Bencomo.» En seguida se halla un informe sin firmas ni rúbrica alguna, con fecha 2 de Febrero de 1817, y en los mismos términos y de la misma letra que el que se hace presente en el dictámen de las comisiones reunidas, como único apoyo en que estribaba la entrega de la iglesia de San Isidro á los padres jesuitas. En éste insiste D. Cristóbal Bencomo en que se lleve á efecto la Real resolucion de 30 de Noviembre anterior, y que se haga la entrega; y al márgen de este informe hay un decreto de letra de S. M., con fecha 23 de Febrero, que dice: «Me conformo en todo con el parecer de Bencomo,» lo que se comunicó á la Junta en el dia siguiente 24.

Finalmente, una consulta original de la Junta de restablecimiento, con fecha 12 de Marzo de 1818, en que daba cuenta de haberse hecho la entrega á los padres jesuitas de la iglesia del Colegio Imperial, con todo lo perteneciente á ella: que se habia dado por extinguido el cabildo de canónigos, subsistiendo en la iglesia para la solemnidad del culto los capellanes de coro y altar, sacristanes, acólitos y demás sirvientes; que se habia hecho la separacion de rentas pertenecientes á la iglesia del Colegio Imperial de las de la capilla antigua de San Isidro y de las que adquirió el cabildo en su nueva forma; que aquellas se entregaron al padre rector, y que para la administracion de éstas, bajo la inmediata autoridad de la Junta, se nombró administrador al mismo que lo era del cabildo, y proponia las providencias que estimaba necesarias para remover los obstáculos que se presentaban para llevar á efecto en todas sus partes lo mandado en el particular.»

Esta consulta no tiene resolucion alguna.

A la comision de Division del territorio español se pasó una exposicion de D. Doroteo José Sobrino, vecino de Navalcarnero, el cual, recordando lo que establecen los artículos 10 y 310 de la Constitución sobre arreglo del territorio y señalamiento de término á los pueblos, indicaba los graves perjuicios que sufrían casi todos por la desproporcion de tener unos un dilatado término, y otros muy poco ó ninguno.

Se acordó que pasase al Gobierno una exposicion en que la Audiencia territorial de Valencia se quejaba del abuso con que se procedia en los recursos de nulidad de las sentencias que causan ejecutoria en juicio contencioso, por quererle extender algunos abogados á cualquiera providencia en que se le figure agravio, en términos indecorosos y ofensivos del respeto debido á los tribunales. Acompañaba testimonio de los escritos del letrado Don Domingo Hernandez, en que por no habersele concedido la vista de un expediente gubernativo antiguo del acuerdo, intentó fuera de tiempo, y despues de los ocho dias que señala la ley, aquel recurso, y le reiteró usando de expresiones las más osadas, insolentes y ofensivas del decoro de muchas personas públicas y de los magistrados de aquella Audiencia; y aunque ésta conocia que podria, con la facultad que le estaba concedida, castigar semejantes excesos, no lo verificaba para que no se dijese obraba con pasion en causa propia, y acudia á las Córtes á fin de que la resolucion pudiese ser general.

A la comision segunda de Legislacion se mandó pasar la exposicion siguiente, que presentó y leyó el señor Moscoso:

«Señor: Apenas fué instalada la Diputacion provincial de Galicia en el fausto dia 9 de Julio, vió agolparse precipitadamente sobre ella las vastas y terribles dificultades que desde luego debia prometerse al considerar que iba á entrar en el gobierno político y económico de una extension territorial de más de 1.300 leguas cuadradas, ocupada por más de la décima parte de los moradores de España, diseminada en pequeños lugares, aldeas y caseríos. Entre los negocios que desde entonces la han ocupado y ocupan diariamente, han llamado principalmente su atencion la division territorial de la provincia en partidos y el establecimiento de ayuntamientos constitucionales. Aquella, tan indispensable para poner á los pueblos en el goce de las preciosas ventajas que les ofrece el sistema constitucional, habia sido ya emprendida por la Diputacion provincial en el año de 1813; mas no llegó á establecerse por el trastorno político ocurrido en 1814. La extinguida Junta de gobierno de esta provincia, habiendo de plantear el órden judicial bajo el sistema de la ley de 9 de Octubre de 1812, hubo de echar mano de los trabajos que la última Diputacion provincial habia dejado hechos para esta division, y por su decreto de 3 de Marzo último la puso en observancia, tal cual aquella la habia formado.

No podia menos de adolecer de los vicios y defectos que son consiguientes á la empresa de tamaña obra, desemeñada con la premura que en su formacion exigió el Gobierno, deseoso de anticipar los momentos para comunicar á los pueblos el benéfico influjo del sistema judicial nuevamente adoptado. Mas si estos vicios ó defectos entorpecieron algun tanto la marcha regular de los negocios y dieron lugar á contiñas reclamaciones de los pueblos, manifestando los perjuicios que reciben, ya por los defectos en la demarcacion de los partidos, ya por su excesiva extension, ya por la mala situacion de su capital y por otros gravísimos inconvenientes que ella presenta, dieron tambien lugar á que, informada de ellos esta corporacion, convirtiese su atencion á hacer en los partidos las rectificaciones que imperiosamente reclaman el órden y la prosperidad de esta provincia. En este estado, y ocupada en reunir las noticias indispensables para hacerlo, ya que no con una perfeccion total, á lo

menos en la mayor posible; noticiosa de que el agosto Congreso nacional ha tomado en consideracion la division de partidos de esta provincia, ha acordado manifestarle el estado de este importantísimo negocio, el cual, rectificado en los muchísimos defectos que palpa la Diputacion, será susceptible de que recaiga sobre él la debida aprobacion, la que en otro caso entorpeceria algun tanto los saludables resultados que la Diputacion se promete de sus asiduas tareas para lograr el fin que se ha propuesto de consumir cuanto antes esta obra.

El establecimiento de ayuntamientos constitucionales es un asunto de demasiada urgencia é importancia para que descuidase de él la Diputacion. Fué, pues, el primero que la ocupó en su primera sesion; mas cuanta es su importancia, tanta es la dificultad que ofrece su pronta formacion, en medio de la dispersion de las parroquias, aldeas, caseríos y lugares en que está distribuida la mayor parte de los habitantes de Galicia. A este obstáculo físico que presenta la naturaleza á la reunion del número de almas suficiente para formar ayuntamiento en un territorio de extension proporcionada para no ser molesto á los vecinos, se agrega otro moral que opone el excesivo número de curiales, que obstinados en conservar su arraigada preponderancia sobre la clase infeliz, ven sus intereses en contradiccion con el establecimiento de estas corporaciones, cuya utilidad debe seguir la razon directa de su corta extension de territorio en cuanto sea posible. Así, pues, deseosa de que todas las parroquias y lugares perteneciesen á algun ayuntamiento, ha acordado desde luego establecerlos en aquellos que los tenian en 1814, prescindiendo de que hubiesen quedado cortados por la línea divisoria de los partidos, mediante que esta es provisional, y adoptando otras medidas para conseguir aquel objeto.

Mas la miseria y escasez de recursos á que las calamidades pasadas redujeron esta digna provincia, presenta otro tropiezo en este interesantísimo paso. Sujeta á una contribucion que la grava tanto más cuanta es la falta de numerario que en ella circula, y para cuyo alivio el Gobierno anterior permitió á los pueblos el uso y arriendo de puestos públicos, se ve con dolor la Diputacion en la dura alternativa de gravarles la cuota de contribucion en la cantidad necesaria para subvenir á sus gastos municipales, ó en la de otorgarles los arbitrios que proponen para cubrir estas atenciones. El primer medio podrá ser dañoso en unas circunstancias en que los pueblos esperan del Gobierno el alivio que no hallaron en el desórden anterior. El segundo, más análogo á la costumbre, sistema y preocupaciones de los pueblos, presenta á lo menos en la situacion actual menores inconvenientes. La Diputacion, pues, se cree precisamente en el caso del art. 322 de la Constitucion, de haber de recurrir á arbitrios de los que usen interinamente los ayuntamientos, mientras recae la resolucion de las Córtes. Nada más urgente, nada más perentorio que la propagacion y establecimiento de la primera enseñanza: nada más sagrado que los establecimientos y casas de beneficencia: nada más interesante que la exaccion de las contribuciones y circulacion de las órdenes del Gobierno; objetos todos que no puede promover la Diputacion provincial, si los ayuntamientos carecen de recursos para ponerlos en movimiento.

En esta atencion, y en la de que en cumplimiento del artículo citado la Diputacion irá informando al agosto Congreso de los arbitrios que adopte á medida de las necesidades de los pueblos, espera obtener su aprobacion en cuanto á este sistema, y que teniendo igual-

mente en consideracion los trabajos en que se ocupa para rectificar los defectos notados en la actual division de partidos, se digne suspender la aprobacion de ella hasta que esta corporacion eleve el resultado de sus tareas, lo que desempeñará con la urgencia que requiere a prosperidad de esta provincia y el servicio de la Nacion.

Coruña 2 de Agosto de 1820. = Pedro Agar. = Por acuerdo de la Diputacion provincial, Plácido Muñiz, vocal secretario interino.»

A la comision de Poderes pasaron los del Sr. D. Lorenzo Rivera, primer Diputado suplente por la provincia de Astúrias. Acompañaba el antecedente relativo al señor D. Manuel Abad y Queipo. (*Véase la sesion del dia 16 del pasado.*)

Se dió cuenta del dictámen siguiente de la comision de Instruccion pública:

«La comision ha examinado la solicitud del rector y claustro de la Universidad de Zaragoza, reducida á que las Córtes declaren por curso completo de Constitucion, para los fines que puedan convenir á los cursantes y catedrático, la temporada desde el 14 de Junio en que comenzaron las lecciones de Constituciones, hasta concluir la explicacion; y encuentra que es digna de tenerse en consideracion, no solo por el objeto que la misma Universidad se ha propuesto, sino tambien por la promesa hecha de acuerdo con el jefe político al tiempo de anunciarse la apertura del curso, sobre pretender esto mismo.

El celo, pues, que la Universidad literaria ha manifestado, el del profesor que se ha ofrecido á proporcionar esta enseñanza, los vivos deseos de éste, y los que concurren á comunicar y adquirir respectivamente unos conocimientos tan necesarios, y el amor que todos muestran á las leyes fundamentales, son en concepto de la comision motivos muy recomendables para que las Córtes oigan benignamente esta solicitud; y opina por lo mismo que pueden acceder á ella por esta vez, sirviéndoles este curso para los fines que convengan al catedrático y discípulos, concurriendo en éstos las circunstancias de aprovechamiento, previo exámen, y tambien la de asistencia.»

Aprobado este dictámen, el Sr. García (D. Antonio) hizo la indicacion siguiente:

«Que en todas las Universidades en que se haya establecido el curso de Constitucion en estas vacaciones, se les admitirá el curso como si fuera en tiempo de estudios.»

El Sr. GARELI: Aunque interesadísimo en la concesion de esta gracia, me opongo á ella. Dénsese enhorabuena certificaciones de asistencia, en calidad de oyentes, á la cátedra de Constitucion á los que las soliciten, como un testimonio de su adhesion al sistema. Yo las he dado en este año, y las dí en 1814. Pero elevar á matrícula las lecciones de verano, y extenderlas á cursantes de otra facultad, y aun á personas que no siguen carrera literaria, además de la acumulacion de dos matrículas en un año, acarrearía graves inconvenientes para las pretensiones, en perjuicio de los que se han sujetado á toda la severidad de la ley en el estudio de la jurisprudencia civil. Me consta se han cometido abusos en el particular. El estudio sólido de la Constitucion,

como parte integrante de una profesion, debe tener su época señalada, y supone conocimientos preliminares.

El Sr. GARCÍA (D. Antonio): Es indispensable que el Congreso determine que esta medida se haga extensiva á toda la Nacion; porque lo contrario seria conceder privilegios, y lo mismo son los privilegios en materia de comercio que en materia literaria. La Universidad de Zaragoza ha conseguido la gracia que solicitaba: ¿por qué, pues, no han de conseguir igual gracia las Universidades que estén en las mismas circunstancias que la de Zaragoza? De otro modo se dirá que se dé á unas Universidades lo que se niega á otras. Sé de muchas que se hallan en el mismo caso, y me consta de la de Osuna, en donde tengo un hijo estudiante.

El Sr. OCHOA: Es preciso que el señor preopinante Gareli no se haya enterado de la solicitud de la Universidad de Zaragoza, á que el Congreso acaba de acceder, ni de la indicacion del Sr. García. De otro modo seria ofender la ilustracion de dicho señor, particularmente en un negocio que por su instituto y profesion le es muy peculiar. La solicitud de la Universidad de Zaragoza está reducida á que se les abone por un curso completo de ciertas facultades la asistencia á la cátedra de Constitucion, establecida en ella en las actuales vacaciones, que principiaron en San Juan de Junio próximo anterior, y finalizarán en San Lucas del Octubre que vendrá, á los jóvenes que despues del correspondiente exámen merecieren la aprobacion y certificacion de aplicacion y aprovechamiento de los catedráticos; y la indicacion del Sr. García es que dicha gracia sea extensiva á todos aquellos jóvenes que se hallan en igual caso en cualquiera otra Universidad de las aprobadas. Habiendo, pues, dirigido el Sr. Gareli su razonamiento á impugnar el que la tal gracia no se conceda á los que han asistido á las cátedras de Constitucion en los meses últimos del curso literario que ha trascurrido, en nada contradice á la propuesta del Sr. García, la que á mi parecer es tan justa, que en su concesion se halla muy interesado el establecimiento del nuevo sistema. Los malévolos han tratado de desacreditarle, esparciendo la voz que la Constitucion destruye nuestra religion sacrosanta; y ¿qué cosa mejor que el que palpen todos los españoles, digámoslo así, que la Constitucion empieza invocando el nombre de Dios Todopoderoso, confesando el incomprensible misterio de la Santísima Trinidad y tributando la veneracion más profunda al Supremo Autor y legislador de la sociedad? ¿Qué cosa más interesante que el que se convenza todo español que la religion de la Nacion española es y será perpétuamente la católica apostólica romana, con exclusion de toda otra, que es el art. 12?

Ni hallo violencia en que los indicados cuatro meses de estudio de Constitucion se estimen por equivalentes á un curso completo, sea de jurisprudencia, sea tambien de teología; porque hallándose consignados en la Constitucion los verdaderos principios del pacto social, del derecho natural, de la política, los derechos y deberes del ciudadano, ¿cuánto podrán aprovechar los jóvenes por este Código, explicado y explanado como debe por un catedrático? ¿Qué ilusion, qué aficion, qué interés no tomará cualquiera al enterarse de las verdades luminosas que envuelve cada una de las páginas de este precioso Código? Hay más: el Sr. Gareli no podrá ignorar que á pesar de que las Reales órdenes marcaban que el joven que no asistiese quince dias de los del curso no ganase certificacion, aunque dejase de asistir por enfermedad ú otra causa inculpable, á no ser que en el cur-

sillo que debía haber en tiempo de vacaciones subsanase estas faltas; y que á pretexto de esta taxativa, cuando un jóven por enfermedad ú otro motivo justo faltaba á la asistencia, no quince días, sino la mayor parte de los ocho meses útiles, le admitíamos al cursillo, y aprovechando, le habilitábamos de la correspondiente certificacion de curso, porque creíamos cumplida la ley en su fin y objeto. que era la aplicacion y aprovechamiento. Si, pues, los jóvenes, privándose de las diversiones de su edad en estos cuatro meses, los destinan y emplean en el estudio precioso de la Constitucion, está en el orden reciban del Cuerpo legislativo el premio á que anhelan; y no solo los jóvenes dedicados á la carrera literaria, sino todo ciudadano, si asiste, aprovecha y es aprobado, debe obtener su certificacion, sin que sea inconveniente el que la presentarán al Gobierno como un mérito positivo; porque yo jamás negaré que lo sea, y el Gobierno tiene bastante prudencia para darle el aprecio debido. Asistan enhorabuena á la cátedra de Constitucion los carromateros, los peones de albañil y los rústicos jornaleros: no estamos en tiempo de hacer misterio de las ciencias: el Código constitucional se ha escrito para todos, y á todos obliga su observancia. Asistan, pues, hasta las mujeres, si quieren, á la cátedra de Constitucion: apréndanla de memoria y penétrense de las máximas que encierra; y esas clases interesadas en la ignorancia, en el desorden, en el despotismo, renunciarán á sus tentativas de derrocar el sistema constitucional, y los hasta ahora incautos conocerán que aquellas se dirigen á restablecer un orden de cosas, en el que se medra por la vil adulacion, por la lisonja y por otros resortes rampantes é indecentes.

Este medio de generalizar las ideas constitucionales es tanto más necesario, cuanto ha sido infructuoso el que adoptó el Gobierno, de que los muy Rdos. Arzobispos y Rdos. Obispos mandasen á los párrocos de sus respectivas diócesis explicasen la Constitucion á sus feligreses. ¿Cuántos párrocos han cumplido con este precepto? Apelo á las noticias que tengan del particular los Sres. Diputados que se hallan presentes. Por lo relativo á mi provincia, puedo asegurar que el eminentísimo Sr. Cardenal de Borbon ha circulado la orden á todos los curas de su arzobispado; pero muy pocos, poquísimos la han ejecutado, al paso que los mismos han publicado despues del ofertorio del santo sacrificio de la Misa, en dia festivo, la circular del juez de rentas decimales, relativa al modo de pagar las décimas, monotoneros, que no se encierre sino de sol á sol, explicándola y persuadiendo su puntual ejecucion con elocuentes discursos. ¡Qué contraste á los ojos de un pensador! Ni es porque todos ó la mayor parte de los párrocos no abunden en buen sentido: conozco á muchos muy íntimamente, estoy cerciorado de sus benéficas ideas, de su ilustracion; pero ¿qué han de hacer? Si hubiesen explicado la Constitucion y omitido el publicar la circular sobre diezmos, ¿cuántos ódios se hubieran atraído de aquellos sin cuyo beneplácito ni pueden medrar, ni contar con la libertad y seguridad de sus personas?

Por lo mismo, concluyo con manifestar al Congreso que la gracia concedida á los alumnos de la Universidad de Zaragoza, no solo debe ser extensiva á los de las demás Universidades del Reino, segun propone el Sr. García, sino á todos los otros de cuantos establecimientos literarios hay en España.»

Declarado el punto suficientemente discutido, y habiendo el Sr. Ledesma hecho de antemano una indica-

cion semejante á la del Sr. García, se conformó éste con que se votase la del Sr. Ledesma, concebida en estos términos:

«Pido que se extienda lo resuelto para con la Universidad de Zaragoza á las demás Universidades que se hallen en igual caso.»

Esta indicacion se aprobó con una adiccion del señor Palarea, reducida á que se extendiese lo resuelto con respecto á la Universidad de Zaragoza á los «demás establecimientos literarios aprobados;» y no se admitió para discutirse la indicacion siguiente del señor Ochoa:

«Que esta gracia sea extensiva tambien á todos los que, sujetándose á exámen en cualquiera Universidad de las aprobadas, merezcan la aprobacion de los catedráticos, aunque hayan hecho su estudio en dichos establecimientos ó privadamente.»

Se dió cuenta de una exposicion de Pablo Lopez, conocido por el *Cojo de Málaga*, el cual, haciendo presentes los graves riesgos á que se habia visto expuesto por adicto al sistema constitucional, hasta el punto de haber sido sentenciado á muerte y próximo ya á subir al patíbulo, pedia á las Córtes enjugasen sus lágrimas, las de su familia y las de otros muchos ciudadanos que esperaban con impaciencia la interesante y trascendental decision del Congreso.

Los Sres. Quiroga y Conde de Toreno recomendaron los servicios y extraordinarias desgracias del exponente, cuya representacion documentada se mandó pasar á la comision encargada de proponer los premios debidos á servicios patrióticos.

Se leyó, y aprobaron las Córtes los términos en que estaba concebido el decreto sobre rebaja de la tercera parte del tercio de la contribucion directa (*Véanse las sesiones de 9 y 10 del corriente*), y á continuacion hizo el Sr. Cavaleri la indicacion siguiente:

«Respecto á que puede acontecer que algunos ciudadanos tengan satisfecho el cupo de la contribucion que les haya correspondido, cuando se publique el decreto de las Córtes que alivia en la tercera parte del cupo de su contribucion en el término que señala el expresado decreto, pido que á los contribuyentes que se hallen en este caso se les indemnice de lo que hayan pagado más de los dos tercios de la contribucion que les corresponde.»

Apoyó esta indicacion el Sr. Gasco, y habiéndola rectificado los Sres. Conde de Toreno y Yandiola, se acordó que á los pueblos y particulares que al tiempo de recibirse el decreto hayan pagado íntegramente el tercio de contribucion que vencerá á fines del presente mes de Agosto, se les indemnice de la tercera parte de que habla el decreto, recibíendosela en parte de pago del último tercio de contribucion del presente año.

Deseando la comision de Hacienda proceder con toda la instruccion posible en el exámen del sistema general de rentas, de que actualmente se ocupa, creia conveniente proponer á las Córtes que antes de presentar su dictámen en cuanto á la supresion de derechos

de puertas de Madrid, que se indica por el Ministerio, se pida informe á la Diputacion provincial y ayuntamiento constitucional acerca de los medios y arbitrios que convenga adoptar para realizar el importe de los derechos municipales en el caso de que opinen por la abolicion, pues sin estos datos teme la comision aventurar su dictámen en un asunto que abraza muchas é importantes atenciones de urgencia diaria y perenitoria.

Las Córtes se conformaron con este dictámen de la comision, acordando, á propuesta del Sr. *Golfín*, que los informes de que se hace mérito en el dictámen se pidiesen con urgencia.

Se leyó el dictámen siguiente:

«La comision especial nombrada para el arreglo de la division del territorio español ha reconocido prolijamente á la luz de sus principios el expediente promovido por el ayuntamiento constitucional de la ciudad de Málaga en el año de 1813, solicitando que se la declare cabeza de su provincia marítima, independiente de la de Granada; cuya pretension coadyuvaron las villas de Oñas, Alozaina, Casarabonela y Macharaviella, y Don Miguel Lastarria, acompañando cada cual los documentos y planos que estimaron convenientes para fijar la atencion de las Córtes, cuyo celo excitó con repeticion el del Gobierno, y éste el del Consejo de Estado, para dar al expediente toda la claridad de que fuese susceptible.

Málaga vuelve á insistir ahora en su anterior solicitud, y las Córtes han pedido nuevo informe al Gobierno, quien lo ha evacuado conformándose con el de la comision que ha nombrado para formar y proponer la division del territorio español que más convenga, la cual opina que puede y debe accederse á la creacion de aquella provincia marítima, quedando por ahora sujetos á ella los 113 pueblos que constan del censo que acompaña.

Bien quisiera la comision especial tener á la mano al evacuar este informe, cartas geográficas exactas, censos siquiera aproximados de poblacion y riqueza, y en una palabra, datos fijos de donde partir; pero como estos trabajos, descuidados en el antiguo régimen, exijan tiempo y circunspeccion, y convenga entre tanto consolidar las nuevas instituciones al través de algunos pequeños inconvenientes, fáciles de subsanar en lo sucesivo, la comision no se detendrá en estos reparos para dar su dictámen acerca de la ereccion de la provincia marítima de Málaga.

Aunque las exposiciones de su ayuntamiento, apoyadas por las demás, dan una idea documentada de la poblacion y riqueza de aquel territorio; y aunque la opinion comun favorezca este concepto, todavía quedara perpleja la comision especial, si los datos que ofrece la facultativa nombrada por el Gobierno no guardasen cierta consonancia con los consignados en las representaciones de Málaga y los otros pueblos, especialmente en el punto de poblacion.

La de los 113 contenidos en el censo remitido por la comision del Gobierno es un medio término tomado entre las noticias suministradas por Málaga en 1813, y por la Audiencia de Granada en 819; y aunque la comision especial conviene con la facultativa en que uno y otro presupuesto, al tiempo de formarse, acaso distaron tanto de la verdad como el espíritu con-

trario que los dictó, no puede omitir que desde 813 hasta el dia debe haberse aumentado la poblacion de aquel territorio, como ha sucedido con otros de la Peninsula, despues de concluida una guerra que retraia del lazo conyugal una inmensa juventud ocupada en la defensa nacional, ó falta de recursos para constituir familia por la comun miseria. Así es que llenando con este aumento el vacío que dejara la supuesta exageracion del ayuntamiento de Málaga, no parece inverosímil á la comision que en efecto ascienda el total de almas de los 113 pueblos á más de 306.000.

Pero aun cuando quede reducido al medio término de 295.195 habitantes, estima que es número muy suficiente para constituir provincia separada, y superior sin duda á otras cuya independencia se ha declarado, como Cádiz, Santander, Avila, Palencia, Toro y Guadalajara.

De la riqueza de Málaga nos ofrece algunos datos ella misma; y aunque se supongan abultados, ¿quién no convendrá en que, muy superior á las cinco últimas, compite con la de Cádiz, ya que no en el comercio, en otros preciosos y particulares frutos de su feraz y bien cultivado suelo, que á la lengua del agua y protegidos en su libre exportacion por las sábias disposiciones de las Córtes, fomentarán prodigiosamente su comercio para ambos mares? Es, pues, claro que tampoco debe negarse á Málaga su noble deseo de separacion por este segundo concepto.

Pero aun es más digno de atencion y respetable el tercero, trazado por la misma naturaleza, que sabe como nadie distinguir la verdad de las opiniones. Ella hizo muy de antemano la demarcacion que despues ha observado la comision del Gobierno, con los límites que nunca osará traspasar la prudencia humana, tomados de las vertientes, las cordilleras de las sierras y montañas y el curso de los rios. Estos linderos permanentes que encierran un vasto, fértil, poblado y rico terreno favorecido de los mares, marcaron á la comision facultativa una provincia marítima, que merece una gobernacion particular é independiente de las de Granada, Sevilla y Cádiz, cuyas pretensiones deben acallar un cúmulo tan apreciable de circunstancias naturales y políticas.

Acaso levantado el plan general de division habrá de hacerse alguna alteracion parcial en uno que otro pueblo de los que ahora se designen, equivocando la direccion de sus vertientes; pero esta posibilidad de tan corta monta no debe privar entre tanto á Málaga del beneficio y la suerte á que la llaman sus destinos aun á principios de este siglo, en que ya comenzó á figurar como provincia en los ramos más importantes.

Entonces consiguíó Sevilla, á la sombra del favor que se habia apoderado del Trono, que se desmembrasen á Málaga siete pueblos, cuya mayor parte por lo menos le correspondian, y se incluyen en el censo pasado por la comision facultativa, en cuya opinion deben quedar Antequera y Archidona dentro de la provincia de Málaga, de donde no podrán sacarse en el arreglo definitivo.

Por todo ello opina la comision especial, conformándose con el parecer del Gobierno, que deben las Córtes deferir á la solicitud de Málaga, declarándola cabeza de su provincia marítima, independiente de la de Granada, con los 113 pueblos que constan del censo remitido por la comision facultativa que de orden del Rey se ocupa en formar el proyecto de division del territorio español.»

Leido este dictámen, se remitió al dia 17 su discusion, agregándose al expediente una Memoria que presentó el Sr. Lastarria con el título de *Apuntes geodésico-*

políticos relativamente á la nueva division territorial de la Península.

Los Sres. Sanchez Toscano, Bernabeu y Sanchez Salvador pidieron permiso de acercarse á tratar con el Gobierno sobre asuntos de sus respectivas provincias. Accedieron las Cortes á esta solicitud.

Continuando la discusion del reglamento de Milicias Nacionales, propuso el Sr. *Golfín* que en el art. 16, despues de las palabras: «á satisfaccion del ayuntamiento,» se añadiese: «y con aprobacion del jefe.»

El Sr. *Cortés* tuvo por inútil semejante adiccion, porque supuso que no siendo el sustituto individuo de la Milicia Nacional, no habria facultad para emplearle, y siendo de la Milicia, como todos debian ser hombres honrados, no podria el jefe oponerse; pero el Sr. *Quiroga* manifestó que ocurriendo tal vez que los milicianos hubiesen de ocuparse en la persecucion de malhechores ú otra operacion de fatiga, podia el jefe oponerse á que se diesen semejantes encargos á un miliciano débil ó de poca disposicion. En consecuencia de estas indicaciones, se aprobó la adiccion del Sr. *Golfín*, desaprobándose como contraria á lo acordado la siguiente del Sr. Torre Marin:

«Que en el art. 17 no se imponga como un deber á esta Milicia el defender los hogares y términos de sus pueblos de los enemigos exteriores, sino como un servicio voluntario que la hará acreedora al merecimiento de la Pátria.»

En el mismo art. 17 se acordó, á propuesta del señor *Golfín*, que despues de la palabra *interiores* se añadiese: *en caso necesario.*

Aprobóse tambien la siguiente indicacion del señor Baamonde:

«Que la comision acuerde en el artículo competente que á esta Milicia Nacional se la habilite de estandarte n lugar de bandera, fijando su color y geroglíficos; si n omitir expresar el lugar en donde deba custodiarse, que parece deberá ser la casa de ayuntamiento de la capital.»

La siguiente del Sr. Freire no fué admitida á discusion:

«Que se añada al art. 12 que las fatigas que hacen los voluntarios se repartan con igualdad con los demás individuos de la Milicia Nacional; pues seria una injusticia que los voluntarios, en premio de su patriotismo, quedasen más gravados que los otros.»

A propuesta del Sr. Moscoso se sustituyó en el artículo 12 á las palabras «á consecuencia del Real decreto de 24 de Abril, se han formado en varias capitales,» las siguientes: «á consecuencia de la publicacion de la Constitucion se han creado en varias poblaciones, etcétera.»

Hizo la indicacion siguiente el mismo Sr. Moscoso:

«Que la comision proponga el artículo del reglamento por el cual se determine el lugar que deben ocupar los cuerpos de Milicia Nacional en las formaciones á que concurran con los de las tropas de servicio activo.»

Convino el Sr. *Sancho* en la necesidad de adoptar lo que se proponia en esta indicacion, para prevenir toda competencia; aunque opinaba que debia tener alguna preferencia el ejército permanente, puesto que la tenia en la defensa de la Pátria, sin embargo de componerse

de españoles iguales una y otra milicia. El Sr. Conde de *Toreno* fué de dictámen que debian, alternar sin que obs-tase el ejemplo de la Francia, en donde á pesar de la deferencia que Bonaparte tenia por el ejército, siempre habia obtenido la preferencia la Milicia Nacional.

Se aprobó la indicacion del Sr. Moscoso.

El Sr. La-Santa hizo la siguiente:

«Pido una declaracion de las Cortes sobre que los voluntarios que en el día sirven en los cuerpos de Milicia Nacional, de que habla el art. 12, pertenecientes á las clases exceptuadas por el art. 2.º, puedan dejar el servicio.»

Aprobada esta indicacion, se mandó pasar á la comision.

El Sr. Alvarez Sotomayor presentó las dos siguientes:

«Primera. En atencion á que á los ayuntamientos se abona un tanto por 100 por la conduccion de caudales á la capital, pido que á los milicianos que escolten á los que hacen esta conduccion se les pague por dichas corporaciones.

Segunda. Pagándose por el caudal de gastos de justicia, en su defecto de penas de cámara, y á falta de ambas, de propios, la conduccion de presos, pido se pague de estos caudales á los que se empleen en ella.»

Opúsose el Sr. *Moscoso* á la primera de estas indicaciones, manifestando que el 3 por 100 que se pagaba era por recaudacion y no por conduccion; y que aprobándose dicha indicacion se destruia uno de los artículos del reglamento de ayuntamientos. Insistió el señor *Alvarez Sotomayor* en su indicacion, cuya discusion concluyó el Sr. *Medrano* diciendo: «El servicio de la Milicia es una carga honorífica; si se paga, ni es carga, ni es honorífica.»

En cuanto á la primera de las indicaciones del señor Alvarez Sotomayor, se declaró no haber lugar á votar; y con respecto á la segunda, no se admitió á discusion.

Á la comision se mandaron pasar las siguientes del Sr. Zapata:

«Primera. Que se determine por quién serán pagados los dos tambores y un pito que corresponden á cada compañía.

Segunda. Que se fije el tiempo que ha de permanecer cada miliciano en el servicio; pues de otra suerte, podria un individuo estar obligado á este servicio por el espacio de treinta y dos años.»

Leyóse á continuacion el art. 21, y fué aprobado con la sola variacion de la palabra «el nombramiento,» en lugar de «la provision de empleos, etc.»

Fué aprobado igualmente el 22.

Entre éste y el que le seguia intercaló la comision el siguiente, con la numeracion de 23, que fué aprobado:

«Los destinos de jefes, oficiales, sargentos y cabos serán amovibles cada dos años, por mitad, comenzando por los primeros nombrados en cada clase; pero podrán ser reelegidos.»

Aprobóse igualmente el art. 24, que llevaria en adelante la numeracion de 25.

El 25, en que se sustituyó el número 26, fué aprobado, variando el principio hasta las palabras «se hallan,» en estos términos:

«Como los individuos que componen los cuerpos de Milicia Nacional, formados desde la publicacion de la Constitucion en varias poblaciones, se hallan, etc.»

Leído el 26, que entró en el orden con el número 27, dijo

El Sr. **VICTORICA**: En atencion á las explicaciones que han hecho los señores de la comision, convengo en que por punto general esté sujeta esta Milicia á la autoridad civil; pero recelo que su absoluta independencia de la autoridad militar ha de causar graves inconvenientes en las plazas fuertes, y en los casos en que deba hacer algun servicio en union con la tropa del ejército permanente. En estos casos, si no está á las órdenes del gobernador militar y del estado mayor de la plaza, preveo que será grande la confusion que se origine, y que no se hará el servicio con la unidad y celeridad que conviene en las operaciones militares. No trato solo de los casos extraordinarios en que el Gobierno reuna los mandos político y militar, sino de un estado de cosas regular y pacífico. Yo convengo en que sea la autoridad civil la única que tenga facultad para poner sobre las armas á los milicianos nacionales; pero cuando sea necesario obrar en una plaza fuerte, ¿quién ha de dirigirlos? ¿Harán sus movimientos con absoluta independencia del estado mayor de la plaza? Confieso que no concibo cómo esto pueda verificarse sin desórden. Al cabo esta Milicia es una fuerza armada, la cual me parece un absurdo que obre dentro de una plaza con independencia del gobernador de ella.

Tampoco apruebo la precision en que se pone á la autoridad superior política, de obrar de acuerdo con el ayuntamiento respectivo en todo caso grave. El determinar esta gravedad seria un semillero de disputas, y produciria un entorpecimiento perjudicial cuando más se necesitase de resolucion y de presteza. Por otra parte, el Rey, con arreglo al art. 365 de la Constitucion, puede en caso necesario disponer de esta fuerza dentro de la respectiva provincia. De esta facultad constitucional será regular que use cuando lo crea oportuno, comunicando las órdenes convenientes al jefe superior político; y si éste, por ser el caso grave, tuviese precision de consultar al ayuntamiento, seria poner á la autoridad Real una traba que no está prescrita en el Código fundamental. Los ayuntamientos deben auxiliar á los alcaldes, segun el art. 321; pero en estos últimos es en quienes reside, con dependencia del jefe superior político, la facultad necesaria para ejecutar las leyes y las órdenes del Gobierno. Estas razones me mueven á desear que se supriman las últimas palabras del artículo, y que en su lugar se pongan otras que indiquen el modo y los casos en que la Milicia Nacional deba ponerse á las órdenes de la autoridad militar.

El Sr. **QUIROGA**: Ya se convino ayer en que la Milicia Nacional debia obrar independientemente de la autoridad militar, y que en el solo caso de un asedio deberia reunirse el mando. La comision, al extender este artículo, ha tenido presentes las razones políticas que son bien conocidas por el Congreso, y no conviene repetir; por lo que creo que debe aprobarse el artículo como está.

El Sr. **MARTINEZ DE LA ROSA**: No puedo menos de apoyar las razones del Sr. Victorica en cuanto á que la Milicia Nacional local esté bajo las órdenes del jefe político ó del alcalde constitucional, sin la limitacion contenida en el final del artículo. Se dice que en los casos graves obrará el jefe de esta fuerza con acuerdo del ayuntamiento; pero ¿quién es el que ha de fijar este caso grave? Si los ayuntamientos han de hacer esta graduacion, este será un entorpecimiento continuo, porque la graduacion de esta gravedad depende de mil circunstancias, siendo peligrosa cualquiera detencion causalmente en los mismos casos que aquí se llaman gra-

ves, y que serán probablemente los de alguna urgencia ó peligro. Por lo tanto, me parece que debiera suprimirse esta parte del artículo. Es verdad que esta Milicia es distinta de la permanente, y que tiene un carácter peculiar y propio; pero no es menos cierto que en toda clase de Milicia debe buscarse la unidad del mando y la celeridad en la ejecucion. Una conmocion popular, que es, v. gr., un caso grave, exige medidas prontas, y que se quiten trabas al ejercicio de la autoridad en vez de imponerle otras nuevas. Es preciso que conservemos un justo medio, y que no por ser demasiado suspicaces, y querer prever y remediar todos los inconvenientes posibles, demos en el escollo opuesto, y hagamos ineficaces é inútiles las más saludables medidas. No olvidemos que esta Milicia se compone de la masa general de la Nacion; que comprende todas las clases de ciudadanos; es decir, las personas más interesadas en la conservacion del órden público y en la defensa de la libertad. Esta reflexion debe tranquilizarnos; y supuesto que es casi imposible que se llegue á abusar de esta fuerza para oprimir á la Nacion, no hallo que sea conveniente ni necesaria la prevencion con que concluye el artículo de que tratamos.

El Sr. **ROMERO ALPUENTE**: Dos objeciones se hacen al artículo: deducidas, la una de la generalidad y consiguiente ambigüedad que dejan las palabras de «en los casos graves,» y la otra, de la condicion que se exige de que en tales casos se haya de poner de acuerdo el jefe superior político con el ayuntamiento. La Milicia se divide en activa y pasiva, ó llámese de reserva; y así como la activa tendrá sus jefes, ésta debe tener los suyos, que son los políticos. Segun se halla en el día esta Milicia general, es la Pátria armada. Esta es una doncella que se la debe respetar mucho; por eso no ha de salir de sus pueblos; por eso se llama Milicia local; por eso deben ponérsela los menores gravámenes posibles, y los más análogos á su instituto. Es verdad que el Rey podrá usar de la Milicia Nacional dentro de su provincia; pero ni esto podrá hacerlo sino en caso necesario, como lo establece la Constitucion, ni esto que se entiende de la Milicia Nacional activa puede extenderse á esta general de reserva ó local, compuesta de propietarios, labradores, maestros, artesanos y comerciantes de alguna tienda ó caudal; casi todos cabezas de familia y personas de obligaciones. La comision ha querido que en los casos graves la autoridad superior política á cuyas órdenes está, proceda de acuerdo con el ayuntamiento, para evitar el abuso que el jefe superior de una provincia, como hechura absoluta del Poder ejecutivo, pudiera hacer. La calidad de grave ella misma ha de manifestarse, pues bastará que el caso no sea de los comunes, como una simple ronda en tiempos tranquilos, para que se califique de tal; la duda sola de ser extraordinario, como el aparato de un tumulto, ó el inminente peligro de enemigos de la Pátria, internos ó externos, bastará para calificarle de grave. Se ha ponderado la necesidad de obrar la autoridad política superior sin acuerdo de otra autoridad, para conseguir la unidad y la celeridad de accion como madre de la victoria; pero yo, sin dejar de convenir en que generalmente la unidad y la celeridad de accion son la madre de la victoria, no puedo menos de reconocer, y conmi go la comision, que al contrario la desunion y la pesadez del plomo, ó la absoluta inaccion, es en algunos casos la madre del triunfo. Estos casos serán todos los en que la autoridad política superior, á título de graves, quisiera abusar de esta fuerza convirtiéndola en ruina de la

Pátria que debia defender, como lo confesarán todos aun cuando procedan con menos buena fé. Así que el artículo debe correr como está.

El Sr. **QUIROGA**: El Sr. Martinez de la Rosa ha querido suponer el caso de una comocion popular. Esta solo puede ejecutarse ó por la Milicia permanente ó por la Nacional local ; si por la primera , habrá de oponerse la segunda, y viceversa; de manera que la comision solo ha tratado de equilibrar estos mandos, que reunidos pueden ser perjudiciales si desgraciadamente se confian en malas manos, y separados deben mantener el orden,

ó es más probable lo hagan. Soy , pues, de opinion que no se toque á este artículo , y que permanezca cual la comision lo propuso.»

Declarado el punto suficientemente discutido, se procedió á la votacion, y el artículo quedó aprobado.

Se levantó la sesion pública, quedando las Córtes en sesion secreta.

Publicación del
Congreso de los Diputados